

## **Demanda en juicio ordinario relación laboral y despido injustificado**

Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

### **□VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:**

1º: Que, comparece CARLOS SANTANDER CASTRO, abogado, en representación de doña MARCELA LORETO LOPEZ CUEVAS, vendedora, domiciliada en Santoña 01960, Villa Cataluña, Temuco, quien interpone demanda en contra de AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA., representada por don EDGAR EDUARDO OROPEZA ACOSTA, gerente, ambos domiciliados en Avenida Providencia N° 1208, Piso 9°, oficina 905, comuna de Providencia, Santiago.

Refiere que con fecha 1° de julio de 2012 ingresó a prestar servicios, bajo vínculo de subordinación y dependencia, a la empresa demandada, para desempeñarse en las funciones de Ejecutiva de Ventas, labor que desempeñaba en terreno visitando los clientes de su cartera, en la Novena Región, dicha relación laboral se mantuvo en la informalidad hasta el 30 de marzo de 2015, firmando al día siguiente con fecha 1° de abril de 2015 el respectivo contrato de trabajo, manteniendo el cargo para el que fue contratada, en las mismas condiciones, bajo las mismas jefaturas, y con total continuidad de las labores que prestaba hasta esa fecha. En efecto, en la relación laboral habida con su ex empleadora en el periodo que corre entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2015, concurren todos los elementos que la distinguen, consistentes en la subordinación y dependencia, que se verificaba a través de sus jefaturas ejercidas por el Gerente general de la época don Jorge Sánchez y por don Diógenes Carreño, Jefe Vendedores zona sur, ejerciendo, además en ese período y en forma continuada más allá de marzo de 2015, los señores Raimundo Vergara, Francisco González, Francisco Contreras y Andrés Guzmán, quienes ejercieron sucesivamente como Gerente Comercial, Ana María Vera, Pablo Martínez y Felipe Mejías, quienes ejercieron como Jefe vendedores zona sur quienes entregaban las órdenes e instrucciones, las que debían ser obedecidas; en la existencia de una remuneración mensual, uniforme y regular; en la prestación de servicios continuos y en la obligación de reportar los servicios prestados de manera regular. Por exigencia de la demandada, su remuneración era pagada contra la presentación de boletas de honorarios, sin embargo, la prestación de servicios personales para la consecución del giro de la demandada, periodicidad y uniformidad del monto de pago, y existencia de subordinación y dependencia demuestran



de una manera inequívoca que la naturaleza jurídica de la retribución de sus servicios, era una remuneración, en los términos expresados en los artículos 41 y siguientes del Código del Trabajo.

Desde el inicio de la relación laboral se pactó una jornada ordinaria semanal sujeta a lo dispuesto en el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo. El estatuto remuneracional pactado, estaba compuesto de un sueldo base por la suma de \$ 301.000.-, más gratificación legal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 del Código del Trabajo, por la suma de \$ 119.146.- más comisiones variables, ascendiendo su última remuneración bruta mensual a la suma de \$ 1.799.079.

En cuanto al término de la relación laboral, este se verifica el viernes 26 de octubre de 2020, por escrito, el que justificó en la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.

Con fecha 6 de noviembre de 2020, firma finiquito, dejando testimonio de la reserva de derechos.

Indica que a pesar de la latitud de la carta que comunica el despido, este se funda en hechos vagos y genéricos que no cumplen el estándar exigido en el artículo 162 inciso 1° del Código del Trabajo y afectan en forma clara y decidida una adecuada y debida defensa, al resultar imposible efectuar descargos respecto de hechos específicos imputados. Pese al carácter vago y genérico de los hechos que fundan la carta de su despido, controvierte su contenido pues estima que aprovecha situaciones esencialmente transitorias, para mezclar con el estado de la empresa, que en ningún caso es consecuencia necesaria y directa de los factores traídos a colación, pudiendo derivar de múltiples otros factores, de resorte absoluto del manejo de la empresa como calidad, stock, publicidad, despliegue de ventas. No es efectivo en que se haya advertido una genuina reestructuración de los recursos humanos, al contrario si hubo un proceso de ese tipo paso inadvertido, señalando que en área de ventas de la IX de la Araucanía, casualmente la única despedida fue la compareciente, siendo inmediatamente reemplazada por otro vendedor, pese a su antigüedad en el cargo.

Solicita de esta manera la declaración de la existencia de la relación laboral alegada, por el periodo que corre entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2015. Consecuencia de lo anterior los años de servicios devengados son ocho años y fracción



inferior a seis meses, por la suma de \$ 14.392.632.- a lo que se debe descontar lo abonado en finiquito antes referido por la suma de \$ \$ 10.794.474.-, quedando un saldo pendiente de pago que por este acto se reclamo por la suma de \$ 3.598.158.-. Asimismo, por su despido injustificado e improcedente, reclama el aumento del 30% de la indemnización por años de servicios, conforme lo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, por la suma de \$ 4.317.790.-. Adicionalmente, solicita se declare que la demandada debe reembolsar, su aporte a su fondo de cesantía en AFC Chile, ascendente a la suma de \$ 1.870.983. Por último su despido no produjo el efecto de poner término a su contrato de trabajo, puesto que existe morosidad en el pago de estas, durante el periodo que corre entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2015, todo lo anterior con las costas de la causa.

2°: Comparece don LUIS PARADA HOYL, abogado, en representación de la demandada AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA, en adelante la “Empresa” o el “Empleador”, ambos domiciliados para estos efectos en El Golf N° 150, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago.

Refiere que la empresa LACTALIS o Grupo Lactalis, es una empresa familiar francesa, con más de 80 años de historia, que ha alcanzado el 5% de participación en el mercado lácteo en el mundo, destacando entre sus marcas más importantes Président, Galbani o Parmalat. En Chile, la compañía está presente desde el año 2017, en virtud de un proceso de adquisición iniciado a fines del año 2016, que significó la compra de 7 compañías, entre ellas, Agrocomercial Codigua SpA. En la actualidad, Lactalis cuenta en Chile con más de 700 trabajadores, 4 plantas de producción ubicadas en Osorno, Purranque, Talagante y Melipilla, 7 centros de distribución y volúmenes de recolección de leche que superan los 160 millones de litros al año, siendo “La Vaquita” una de sus marcas nacionales más reconocidas.

Refiere que la actora ingresó a prestar servicios a Agrocomercial Codigua con fecha 1 de abril de 2015, en el cargo de Ejecutivo de Ventas de productos lácteos. En dicha función, se encontraba a cargo de la gestión de los clientes de la IX Región, debiendo visitar diariamente a sus clientes y/o locales asignados y preocuparse de lograr ventas, entre otras funciones. La señora Marcela López prestaba servicios exenta del límite de la jornada ordinaria de trabajo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo. Asimismo, su última remuneración mensual para efectos de lo dispuesto por el artículo 172 del mismo Código ascendía a \$1.799.079.



Con fecha 26 de octubre de 2020, la actora fue desvinculada de la Empresa, mediante el envío por carta certificada de una carta de despido por la causal de necesidades de la empresa dispuesta por el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, a raíz de un proceso de reestructuración del Área de Ventas en la que prestaba servicios, ocasionada por motivos financieros y cambios en las condiciones del mercado.

No es efectiva la fecha de inicio que menciona la demandante. En efecto, al adquirir el grupo de su representada la empresa Agrocomercial Codigua el año 2017, se informó a la Empresa que la señora Marcela López había prestado servicios con anterioridad al 1 de abril de 2015, pero en calidad de comisionista mercantil, y sin sujeción alguna a subordinación y dependencia de Agrocomercial Codigua. En efecto, la actora prestaba servicios en virtud de un mandato comercial, el cual según dispone el artículo 233 del Código de Comercio. Dentro de los tipos de mandatos comerciales, la actora se encontraba sujeta al contrato de comisión mercantil para la venta, regulándose su prestación de servicios de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 302 y siguientes del Código de Comercio. Este contrato comercial, se diferencia del contrato de trabajo –entre otros aspectos- en la inexistencia de subordinación y dependencia con el comisionista. No existió, por tanto, en dicha época los elementos o indicios que dan cuenta de una relación de naturaleza laboral entre las partes, los cuales existiendo contrato de trabajo con posterioridad sí se dieron.

En cuanto al término de la relación laboral, la causal se encuentra absolutamente apegada a los parámetros establecidos en la jurisprudencia judicial. En la especie, tal como señala la carta de despido entregada a la señora López, y como se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente, la terminación del contrato de trabajo de la actora obedeció a un proceso de reestructuración interna del Área de Ventas en que prestaba servicios la demandante, ocasionado este por los motivos financieros señalados en la carta de despido. En efecto, se señalan como motivos de la reestructuración: (a) los malos resultados operacionales de la Empresa ocasionados post estallido social de octubre de 2019 y efectos de la pandemia del Covid-19 el año 2020; (b) incidencia de ambos sucesos en los resultados financieros a raíz de una baja en las ventas; (c) condiciones negativas del mercado; (d) pérdidas acumuladas.

En virtud del flujo de caja deficitario al cierre de los años 2019 y 2020, la Empresa debió recurrir al financiamiento de la casa matriz para poder cubrir los gastos de capital de trabajo e inversiones, suscribiéndose contratos de préstamos intercompañía con BSA



Finance, uno en abril de 2020 y otro en abril de 2021. Respecto a las pérdidas reseñadas, como señala la carta de despido, en el mes de septiembre de 2020, existía una pérdida de \$1.255.824.000 millones de pesos chilenos, a lo cual se sumó una pérdida de efecto precio v/s gastos de estructura de costos que involucra oficinas, equipos, fletes, comercialización, utilities, c. industriales con una pérdida acumulada de \$2.495.742.000 millones de pesos chilenos, lo cual terminó en una pérdida total de \$3.859 CLP (millones de pesos chilenos).

Los motivos financieros y de cambios en las condiciones del mercado ya señalados, hicieron necesaria una reestructuración del Área de Ventas en que prestaba servicios la señora López. Dicha reestructuración implicó la reducción de personal de la Empresa, redistribuyéndose la totalidad de las funciones de la actora en otro trabajador del área, el señor Marco Nahuelcheo. Así, niega que la trabajadora haya sido reemplazada en su cargo. En efecto, la señora Marcela López se hacía cargo de los clientes de la IX Región, que incluye todos los clientes del canal distribuidor, canal tradicional, Food Service y las salas de cadenas nacionales de dicha región. Una vez desvinculada de la compañía, todos sus clientes pasaron a estar a cargo del señor Marco Nahuelcheo

Refiere que resulta improcedente la sanción de nulidad del despido del artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo, que procede única y exclusivamente en los casos en que el empleador no hubiere efectuado el íntegro pago de las cotizaciones previsionales al momento del despido. Para la procedencia del pago de cotizaciones previsionales, se requiere necesariamente una prestación de servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. De esta forma, si uno de los puntos de controversia del presente juicio dice relación precisamente con la naturaleza de la relación existente entre las partes con anterioridad al 1 de abril de 2015, va a ser la sentencia de autos la que establezca dicha naturaleza, por lo que no procede aplicar una sanción cuando su representada no ha pagado jamás una remuneración, no ha retenido ninguna cotización, no pudiendo efectuar el pago de éstas. La sentencia que eventualmente se dicte a este respecto y los montos que en ellas se establezcan será necesariamente constitutiva de derechos y obligaciones y no, en cambio, declarativa. La Empresa no ha descontado de las supuestas remuneraciones de la señora López aquellos montos destinados al pago de sus cotizaciones previsionales. La sanción de nulidad del despido va dirigida en contra del empleador que no hubiere enterado las cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

Se refiere a la improcedencia de la devolución del descuento de la AFC



Solicita el rechazo íntegro de la demanda con expresa condena en costas.

**3º:** Se llevó a efecto la audiencia preparatoria que dispone el procedimiento, instancia en la cual se efectuó el llamado a conciliación que dispone el mismo, el que no prosperó.

Se establecieron como hechos pacíficos: 1) La existencia de la relación laboral. 2) El hecho del despido por la causal del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo con fecha 26 de octubre del año 2020. 3) Que la remuneración del demandante era de \$1.799.079. 4) Que el monto descontado por aporte de empleador al seguro de cesantía es de \$1.870.983.

Los hechos controvertidos: 1) Fecha de inicio de la relación laboral. 2) Hechos contenidos en la carta y su efectividad. 3) Estado de pago de las cotizaciones de seguridad social.

**4º:** En la audiencia de juicio, las partes procedieron a incorporar los medios probatorios ofrecidos en audiencia preparatoria:

La parte demandada:

Documental:

- 1) Contrato de trabajo y anexos de Marcela López.
- 2) Carta de despido enviada a la actora, comprobante de envío por carta certificada y aviso de despido dado a la Dirección del Trabajo.
- 3) Finiquito Laboral firmado por Marcela López.
- 4) Descriptor del cargo de vendedor desempeñado por la actora.
- 5) Liquidaciones de remuneraciones de la actora, correspondientes a los meses de abril a octubre de 2020.
- 6) Certificado de cotizaciones previsionales de la actora, correspondientes a toda la vigencia de la relación laboral.
- 7) Licencias médicas de la actora, correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2020.
- 8) Estados Financieros auditados correspondientes al año 2017 y 2018, y Estados Integral de Resultados 2017 a 2020, de Agrocomercial Codigua SpA.



9)Informe de Procedimientos Previamente Acordados, de fecha 7 de mayo de 2021, emitido por el auditor externo BLTA Audit Ltda.

10)Books Latam Diciembre 2019 y Diciembre 2020.

11)Contratos de préstamo entre Agrocomercial Codigua y la empresa BSA Finances, de fechas 24 de abril de 2020 y 15 de abril de 2021, firmados y traducidos al español.

12)Correo electrónico de fecha 29 de enero de 2020, enviado por Carmen Nieto a Marco Nahuelcheo. 13)Organigramas del Área Comercial años 2017, 2018, 2019 y 2020.

14)Contratos de trabajo de Marco Nahuelcheo, Carolina Aleska, Pedro Alejandro Solís, Sergio Enrique Solís y Wendy Martínez, esta última con su anexo.

15)Cartas de término de contrato y comprobantes de aviso de Yesenia Tapia y Pedro Barahona, y carta de renuncia autorizada ante notario de María Fernanda Castillo.

16)Cartas de despido y finiquitos laborales de Enrique Solís, Erika Figueroa, Juan Osvaldo Sepúlveda y Pedro Solís.

17)Finiquitos laborales correspondientes al año 2019 y 2020, todos por la causal de despido de necesidades de la empresa, de los trabajadores Verónica Alarcón, Alberto Soto, Alejandra Medina, Javiera Vásquez, Carolina Herrera, Henrique Retamal, Ximena Huilipan, Antonio Rosales, Cynthia Inostroza, Alfredo González, Elena Valenzuela, Mauro García, Andrés Aliaga, Pablo Alvear, Ivone Cortés, Rodrigo Carvajal, Willy Riquelme, Jennifer Ulloa y Víctor Bustos.

18)Emails intercambiados entre Javiera Gatica y otros, de fechas 7 de marzo de 2019, 1 de septiembre de 2020, 2 de noviembre de 2020, 18 de noviembre de 2020 y 31 de julio de 2020.

#### Testimonial:

1) Declaración de Juan Carlos Ruiz Cordero, Rut 26.952.938-5.

2) Declaración de Carmen Gloria Nieto Gutiérrez, Rut 9.445.085-3.

3) Declaración de Javiera Gatica Rodríguez, Rut 15.931.334-4.

4) Declaración de Felipe Esteban Mejías Segovia, Rut 15.098.358-4.

#### Oficios:

1) SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS,

#### Exhibición de documentos:



1) Copia de las boletas de honorario, físicas o electrónicas, emitidas entre el periodo del 1 de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2015, tanto a mi representada como a otras empresas a las cuales prestó servicios.

Otros medios de prueba:

- 1) Email de Felipe Mejías a Carmen Gloria Nieto, con su adjunto, de fecha 5 de febrero de 2020.
- 2) Email de Javiera Gatica a Andrés Guzmán, con su adjunto, de fecha 28 de noviembre de 2019.
- 3) Email de Javiera Gatica a Andrés Guzmán, con su adjunto, de fecha 21 de abril de 2020.
- 4) Email de Javiera Gatica a Andrés Guzmán, con su adjunto, de fecha 26 de marzo de 2020.

Prueba demandante:

Documental:

- 1) Contrato de trabajo celebrado entre las partes con fecha 1 de abril de 2015.
- 2) Descriptor de cargo emitido por Agrocomercial Codigua con fecha 7 de marzo de 2014.
- 3) Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de mayo de 2015.
- 4) Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de julio de 2015.
- 5) Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de julio de 2017.
- 6) Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de septiembre de 2018.
- 7) Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de marzo de 2019.
- 8) Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 26 de octubre de 2020.
- 9) Finiquito de contrato de trabajo de fecha 28 de enero de 2020, con reserva de acciones.
- 10) Informe mensual de boletas emitidas correspondiente a los meses de julio del año 2012 a abril del 2015.
- 11) Correo electrónico de fecha 10 de julio de 2012.
- 12) Correo electrónico de fecha 18 de julio de 2012 con arrastre (3 páginas).
- 13) Correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2012.
- 14) Correo electrónico de fecha 8 de octubre de 2012.
- 15) Correo electrónico de fecha 8 de diciembre de 2012.
- 16) Correo electrónico de fecha 4 de febrero de 2013.
- 17) Correo electrónico de fecha 6 de junio de 2013.





- 18) Correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2014.
- 19) Correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2014 con arrastre.
- 20) Correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2014. 2
- 21) Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2014.

Confesional:

Edgar Eduardo Oropeza Acosta.

Testimonial:

- 1) Enrique Alejandro Urbina Parada, Rut 13.302.444-1.
- 2) Rodrigo Andréa Nova Baccelli, Rut 12.549.635-0.

Oficios:

- 1) AFP CUPRUM
- 2) AFC CHILE S.A.
- 3) ISAPRE BANMÉDICA.

**5º:** Relativo a la existencia de la relación laboral, hemos de mencionar que la denunciante incorpora informe mensual de boletas emitidas extendido por el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo incorpora las boletas de honorarios a propósito de la exhibición de documentos que se le requiere. Las boletas de honorarios están extendidas por la demandante indicando en su giro: *“otras actividades de servicios personales N.C.P. , secretaria ejecutiva, asesora laboral, prev. comisionista en ventas y joyas”*, tratándose de boletas mensuales, ininterrumpidas desde el mes de julio del año 2012 al mes de abril del año 2015. Las boletas están extendidas a “Agrocoemrcial Codigua Limitada”, y se indica en ellas “comisión por ventas”. Existiendo para algunos meses más de una boleta extendida a la demandada.

Las boletas que se acompañan del año 2012 son por los siguientes montos: \$304.209 julio; \$33.801 y \$310.009 agosto; \$409.766 septiembre; \$287.746 octubre, \$369.902 noviembre; \$386.028 diciembre.



Las boletas que se acompañan del año 2013 son por los siguientes montos: \$307.187 enero; \$378.950 febrero; \$362.044 marzo; \$353.371 y \$2.172.368 abril; \$440.504, \$73.741, \$2.774.722 mayo; \$421.726, \$153.359 y \$1.722.492 junio, \$478.314, \$114.194, \$1.338.996 julio; \$479.772, \$106.353, \$858.342 agosto; \$639.953, \$152.002 septiembre; \$786.523, \$224.078, \$865.958, \$901.114 octubre; \$793.383, \$196.729, \$1.041.147 noviembre; \$774.804, \$102.008, \$961.523, \$961.523 diciembre.

Las boletas que se acompañan del año 2014 son por los siguientes montos: \$786.971, \$84.656, \$1.516.473 enero; \$694.467, \$139.861, \$160.8639 febrero; \$829.432, \$172.473, \$658.121 marzo; \$674.094, \$126.924, \$736.636 abril; \$682.030, \$106.734, \$1.854.841 mayo; \$657.128, \$132.179, \$835.934, \$994.377 junio; \$1368.321, \$561053, \$1368321, \$136.831, \$133.538 julio; \$656.496, \$2.845.978 agosto; \$2.946.838, \$62.834, \$960.963, \$140.262 septiembre; \$1.238.097, \$3.003.469 octubre; \$1.218.667, \$1.218.667, \$3.403.117 noviembre; \$4.854.431, \$4.854.431, \$1.160.619, \$4.406.596, \$91.014 diciembre

Las boletas que se acompañan del año 2015 son por los siguientes montos: \$1.501.423, \$3.707.612 enero, \$4.002.683, \$1.409.170 febrero; \$1.317.177 marzo; \$1.427.210 abril.

**6º:** La demandante rinde además en juicio la testifical de don Enrique Urbina Parada y de don Rodrigo Nova Baccelli, ambos se encuentran contestes en indicar que la demandante comenzó a prestar servicios para la demandada desde mediados del año 2012, en ese tiempo el señor Jorge Sanchez era el gerente comercial, y fue el quien la contrató mediante boletas a honorarios. Los testigos mencionan que la demandante se desempeñaba como vendedora en Temuco, precisando el último de los testigos que ella era vendedora de toda la IX región y parte de Valdivia en aquel entonces. Los testigos mencionan que a ella le pagaban por ventas, pero en el año 2015 se le regularizó el contrato, siendo enfáticos en menciona que no hubo cambio en sus actividades, aquella continuó realizando las mismas labores que desempeñaba, pero con contrato de trabajo. Agregan que aquella siempre trabajo afecta al artículo 22 del Código del Trabajo, tal y como se realiza hasta la actualidad, precisando el primero de los testigos que la conoce desde esta fecha por que anualmente, los fines de años, se hacía una reunión de todos los vendedores de Chile, asistiendo aquella como representante de la zona sur de Temuco, siendo aquel vendedor en la región Metropolitana, pero realizando idénticas funciones.



Por su parte el testigo Rodrigo Nova, menciona que conoció a la demandante en el año 2012, cuando aquel trabajaba como vendedor para la empresa Unilever, y se conocieron precisamente en el ejercicio de su trabajo, pues les tocaba atender a los mismo clientes, agregando que fue ella quien le recomienda trabajar en la empresa Agrocomercial Codegua, motivado por los ingresos que aquella percibía, verificando su ingreso a la empresa en el año 2017. Sostiene que las funciones de aquella nunca variaron, entre aquellas estaba la venta de lácteo, queso, mantequilla. La modalidad es presencial, uno visita a los clientes, ve sus requerimientos lo que le falta, los asesora, le muestra su cartera de productos y a partir de eso se genera una nota de venta y hay distintas modalidades. ¿Ambos agregan que la jefatura directa de la demandante en aquel tiempo era el señor Jorge Sanchez, de la denominada “Vaquita” en ese entonces, cambiando con posterioridad la administración de la empresa.

7º: Se incorpora a demás correos electrónicos entre la demandante y personal de la demandada, que en su mayoría trata de las ventas efectuadas por la demandante y las comisiones que aquella le corresponden.

A juicio de este Tribunal, el estándar de prueba exigido para acreditar la existencia de la relación laboral es el de la prueba prevaleciente, el que con el mérito de los antecedentes incorporados es suficiente para establecer su existencia.

En efecto, si bien la prueba no es abundante, tiene la virtud de ser consistente y precisa. Pues los testimonios referidos sitúan a la actora desde mediados del año 2012 como trabajadora de la demandada. En aquel tiempo ya prestaba servicios en la empresa, en idéntica función el testigo Rodrigo Urbina. Por su parte el testigo Rodrigo Novoa, trabajaba también en aquel tiempo en el área de venta, pero para una empresa distinta en cuya labor conoce a la trabajadora, motivándole a ingresar a la empresa en que aquella laboraba, lo que se materializa en el año 2017. En este contexto, se menciona que la demandante antes de ser contratada en el año 2015, realizaba idénticas funciones con la única diferencia que se le pagaba mediante boletas a honorarios obteniendo una comisión por ventas, pues aquella debía visitar a los clientes, ofrecer los productos, generar la venta y disponer la forma de pago. Lo que se condice con aquellas funciones que son descritas en el contrato de trabajo de la demandante, en cuya clausula primera se señala “el trabajador se obliga a desempeñar la función de Ejecutivo de ventas de productos lácteos: encargado de visitar diariamente a sus clientes y/o locales asignados; preocuparse de lograr ventas y aumentar



mix productos; reunirse diariamente con su supervisor, preocuparse que las O/C se preparen.

Asimismo, y para acreditar la continuidad en la prestación de los servicios, están las boletas de honorarios que son ininterrumpidas desde el mes de junio de 2012 al mes de abril de 2015, mes en el que luego se suscribe contrato de trabajo, boletas que no son uniformes en cuanto al monto a pagar pero que se explica por la circunstancia que su remuneración estaba constituida por una comisión por las ventas, lo que hacía su remuneración evidentemente variable. Tener en consideración que al término de la relación laboral la demandante también detentaba una remuneración mixta, con una parte variable determinada por las comisiones.

Por otra parte, y tal como se establece en su contrato de trabajo, la modalidad de su trabajo exigía que aquel fuera desarrollado esencialmente en terreno, en cada uno de los locales pertenecientes a la región que le era asignada, lo que explica la sujeción al artículo 22 del Código del Trabajo.

Por último, aquella se encontraba sujeta a la supervigilancia directa de don Jorge Sánchez, identificado como el gerente comercial de la empresa en aquel entonces.

Conforme a lo anterior a nuestro juicio se verifican cada uno de los elementos de subordinación y dependencia que se exigen para configurar una relación laboral al tenor de lo dispuesto en el artículo 7° del Código del Trabajo, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2012 al 31 de marzo de 2015.

**8° :** Hemos de descartar las alegaciones de la demanda en orden a señalar que aquella mantenía una contratación como “comisionista mercantil” de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Comercio, no solo por cuanto en su teoría la demandada no rindió prueba alguna a este respecto, sino que además conforme fue analizado, la prueba rendida por la demandante rebasa cualquier posibilidad de mandato comercial, no contando la demandante con ninguna profesión que permita darle mayor sustento a esta teoría.

En el mismo sentido, la circunstancia que la demandante haya emitido boletas para otras dos empresas diversas en el periodo que se ha reconocido la relación laboral con la demandada, no obsta la existencia de una relación laboral, en las que se puede o no pactar exclusividad, teniendo presente que además los montos de aquellas boletas son marginales en relación a los obtenidos por las labores de venta con la demandada y no son continuos, sino más bien esporádicos.



**9º:** Habiendo sido reconocida la existencia de la relación laboral desde el mes de julio de 2012 a marzo del 2015, contrario a lo sostenido por la demandada, la presente sentencia tiene el carácter de declarativa de una situación que ya se verificó en los hechos, de manera irregular, en cuya virtud al restablecerse el imperio del derecho, corresponde que la demandada regularice el pago de las cotizaciones de seguridad social de la demandante en las instituciones de AFP Cuprum, Isapre Banmédica y AFC Chile, considerando las remuneraciones percibidas por la actora en el periodo ya indicado, conforme a la descripción detallada efectuada en el considerando quinto de la presente sentencia, sin perjuicio de estarse al tope legal cuando corresponda en relación a la remuneración percibida por cada mes.

Se hará lugar además a la sanción del artículo 162 inciso quinto y séptimo del Código del Trabajo, debiendo la demandada continuar con el pago de las remuneraciones de la demandante desde el término de la relación laboral hasta su efectiva convalidación con el pago de las cotizaciones antes mencionadas teniendo como base remuneratoria la suma de \$1.799.079.-suma que constituye un hecho pacífico, en atención a los mismos fundamentos antes mencionados relativo a la naturaleza de la presente sentencia.

**10º:** Luego y tocante al término de la relación laboral, el contenido de la carta de despido y la efectividad de tales hechos, esta menciona:

*“Esta causal se funda en los resultados operacionales de la empresa del ejercicio del año 2019 post estallido social y año 2020 con toda la contingencia generada por la crisis de COVID.19, que han incidido en los resultados financieros en su globalidad, a partir de las bajas ventas que ha registrado la Compañía con una pérdida acumulada de toneladas y en valor superior a 1.255.824.000 mil millones CLP, sumado a las condiciones negativas del mercado actual en la zona que usted representa, tal cual se evidencia en el siguiente informe:*

*1) Encontramos una pérdida acumulada a septiembre de 2020 de \$1.255.824.000 millones de pesos chilenos.*

*2) Efecto precio vs gastos de estructura de costos que involucra oficinas, equipos, fletes, comercialización, utilities, c. industriales con una pérdida acumulada de \$2.495.742.000 millones de pesos chilenos.*



*(Adjunta recuadro)*

*En razón de lo indicado precedentemente, la empresa a partir del segundo semestre de 2019 y hasta la fecha, ha generado distintas reestructuraciones del área de ventas, ha fusionado zonas geográficas, ha unido cartera de clientes, con la finalidad de racionalizar los costos operativos, todo ello a fin de evitar, o al menos minimizar, el impacto y las consecuencias negativas que el mal estado de los negocios de la Empresa pueda ocasionar.*

*En efecto, la reestructuración del área de ventas a la que hacemos mención implicó:*

*A) La fusión de la zona norte y zona sur con más de 1567 salas de atención, fusionando una sola Jefatura de Ventas, un solo Analista de Call Center y de Digitación de Pedidos, centralizando de esta forma las rutas con la Región Metropolitana, así como la coordinación de facturas.*

*B) Asimismo, este proceso ha devenido en una transformación de la posición de Ejecutivo de Ventas. Así, a la cartera de clientes de la ciudad de Temuco que se encontraban bajo su responsabilidad, se han sumado otras comunas de la Región de la Araucanía, tales como Victoria, Lautaro o Angol; e incluso otras comunas que se encuentra fuera de esta región, como son Los Ángeles, Valdivia y Puerto Montt, tareas que ha pasado a ser desarrolladas por otro ejecutivo, que tenía bajo su responsabilidad las zonas geográficas mencionadas, y que en su totalidad son las que se indican en la tabla a continuación:*

*( incorpora una lista de locales y cadenas con la ciudad en que se encuentran emplazados)*

*Es por esta razón, que forzosamente debemos prescindir de sus servicios.” (sic.).*

**11°:** Como cuestión previa, hemos de descartar la alegación de la demandante quien sostiene que la carta de despido es insuficiente para comprender los hechos que allí se mencionan, así, la exigencia legal impuesta en el artículo 454 N° 1 inciso 2°, impide probar *hechos distintos como justificativos al despido* en relación a aquellos que fundaron la carta de despido, no obstante, del sustrato factico de aquella es posible advertir tres elementos de relevancia para su análisis. El primero de ellos relacionado con los eventos vivenciados en



el país en el mes de octubre de 2019 y la Pandemia ambos como hechos públicos y notorios y las dificultades para el mercado, el segundo, como estos hechos han afectado a la demandada, el tercero dice relación con la consecuencial afectación grave de los ingresos de la compañía, elementos a partir de los cuales es posible la incorporación de prueba.

**12°:** Corresponde indicar que la prueba que aporta la demandada, da cuenta que la situación financiera de la empresa, ya era compleja en el año 2018, así consta del informe de auditoria externa de la empresa BLTA, que concluye que la empresa Agrocomercial Codigua SPA, vio afectado su patrimonio en forma negativa por un monto de \$413.711.122 al 31 de diciembre de 2018. Informe de procedimientos acordados relacionados con la revisión de ajustes y regularizaciones contables realizados por la actual administración del grupo de empresas Lactalis en septiembre y diciembre de 2018.

En consecuencia, con dicho informe, los testigos Juan Carlos Ruiz Cordero sub gerente de administración y finanza, declara al tenor del informe del estado financiero de la empresa que le es exhibido. Refiere que desde el año 2017 al 2019, hay una pérdida de 1000 millones mensuales, hay una leve mejoría en diciembre de 2020, pero sigue existiendo perdidas. Explica que para el año 2019 y 2020 el costo de las ventas se aumentó sustancialmente por el aumento de la materia prima, ya que la leche aumenta de precio, lo que obedece a razones de mercado. Sin perjuicio, los gastos de administración en 2020 se incrementaron, por los acuerdos comerciales con cadenas de supermercados, costos que deben ser imputados al tema de Covid y del estallido social, alrededor de 215 millones por deudores morosos, clientes atrasados en el pago, que a su turno también argumentaban razones de Covid, en donde muchos perdieron negocios, paralelo a ello, la empresa incurrió en gastos adicionales en transporte y equipos de protección personal.

En el mismo sentido declara don Felipe Mejias jefe de ventas de la zona norte y sur, quien refiere que el proceso de reestructuración se inicia en el año 2018, sin perjuicio después de octubre de 2019, específicamente después del estallido social, dada las bajas ventas, y la circunstancia que hubo zonas en cuarentena, en donde las salas de venta no podían operara, el volumen de venta bajo y eso los llevo a acelerar esta reestructuración. Agrega que muchos negocios cerraron, incluso supermercados grandes fueron saqueados y muchas salas de supermercado estuvieron cerradas por el saqueo, o con horarios más restringidos, precisando que ellos no atienden directamente a almacenes pequeños, porque no tienen la estructura para llegar. Posterior a eso, se empezó a implementar los cordones



sanitarios, había cordones para ingresar a Concepción, y no podían ingresar los pedidos. Temuco, la zona donde se desempeñaba la demandante fue una de las zonas más afectadas por la zona Covid y con cordones sanitarios muy difíciles de superar. Tenían que estar 3 a 4 horas esperando para poder pasar las zonas, y muchas veces los camiones se debían devolver, lo que les fue restando volumen. Las pérdidas acumuladas eran en torno a 1200 millones de pesos, de hecho, sabe que la empresa tuvo que pedir un financiamiento a la casa matriz para solventar la estructura de costos de la empresa.

Se incorpora además estado financiero correspondiente al 31 de diciembre de 2018 y 2017, elaborado por la empresa Deloitte, así como un resumen de estado integral de resultados por función por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 al 2020 en miles de pesos chilenos. En el concepto denominado “Ganancia del año” aparece la suma de -2.397.247 para el año 2017; -3.170.757 para el año 2018; -4.204.179 para el año 2019 y -1.002.036 para el año 2020.

Consta de la misma forma, dos contratos denominados “convenios de préstamos” con su respectiva traducción de 24 de abril de 2020 por la suma de \$13.700.000.000 y de fecha 15 de abril de 2021 por la suma de \$8.000.000.000 celebrado entre B.S.A Finances S.N.C como prestador y Agrocomercial Codigua S.P.A como prestatario.

**13º:** Por otra parte, la demandada rinde prueba para establecer las reestructuraciones efectuadas al interior de la empresa, y específicamente en relación a la demandante. Así consta de la declaración de los testigos Carmen Nieto, Juan Carlos Ruiz, Felipe Mejías y Javiera Gatica, todos ellos están contestes en mencionar que desde el año 2019 se inició un proceso de reestructuración profundo, fusionando zonas, reduciendo personal, se cerraron bodegas específicamente en la cuarta región, disponiendo la existencia de un único vendedor por región, a excepción de la zona sur extrema en que se dispuso un vendedor por dos regiones, el testigo Juan Carlos Ruiz, menciona que antes eran dos jefes zonales, de la zona sur y norte, pero por la reestructura se dispuso mantener uno solo para que asumiera ambas zonas. La testigo Javiera gatica, menciona que en su área de regulación de ventas habían 5 digitadores cuando ingreso en el año 2018, hoy día tiene solo tres. En el área de reposición había una jefa de reposición y 42 reponedoras hoy no hay jefa de reposición y se mantiene 39 reponedores. En el área comercial, antes tenían un jefe de venta para zona norte y sur, cargo que hoy es compartido. En el sur han hecho varias reducciones, aumentar zonas de cobertura con menor cantidad de personas. En el caso de Marcela Lopez, quien se desempeñaba como ejecutiva de ventas en la zona sur de Temuco, su zona fue una de las





más afectadas durante la pandemia, así la demandante hace uso de una licencia médica por un extenso periodo de tiempo en el año 2020, y durante ese periodo quien le reemplazo fue el ejecutivo de ventas del sur extremo, Puerto Montt, Valdivia hacia el sur, don Marcos Nahuelqueo, que es la misma persona que una vez que se despide a Marcela continua con su cargo, sin que se haya verificado una nueva contratación.

Las declaraciones antes mencionadas, encuentran sustento en otros antecedentes probatorios, tales como los quince finiquitos que se acompañan, correspondientes a trabajadores de la demandada, todos por la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, verificados en el año 2019 y 2020, organigramas del área comercial y licencias médicas de la demandante por el periodo enero a septiembre de 2020.

**14°:** Así la prueba de la demandada es abundante, consistente entre sí, y de relevancia para comprender que la situación económica de la empresa, se vio afectada en magnitud, y gravedad adoptando medidas consecuentes para rebajar los costos operativos y dar una solución al mal estado financiero de aquella, debiendo recurrir a la obtención de préstamos millonarios para el año 2020 y 2021 como ora de las medidas para paliar el negativo estado financiero.

Hemos de mencionar que la situación financiera de la empresa, conforme a los informes de auditorías incorporados, ya era critica al año 2018, de allí que la reestructuración se haya iniciado a partir del año 2019, sin perjuicio de aquello, aun cuando la venta del producto propio de su giro comercial, no es de aquellos que puedan suponer una grave afectación en el contexto de los acontecimientos vivenciados en el país en el mes de octubre del año 2019 y luego a nivel mundial para el año 2020, lo cierto es que la prueba rendida logra explicar (testimonial) que el producto es de aquellos que se oferta a cadenas de supermercados, en donde varias salas – como le denominan los testigos- fueron cerradas producto de saqueos o incendios, para luego mencionar que durante la pandemia también existió una contracción en las ventas, particularmente en la zona sur, dada la existencia de cordones sanitarios, además de la circunstancia de existir restricciones horarias.

De esta manera, el despido por la causal de necesidades de la empresa del artículo 161 inciso 1° a nuestro juicio ha sido correctamente invocada.

¿Así, las necesidades, hemos de convenir con el criterio doctrinal mayoritario, requiere considerar tres aspectos, su objetividad, gravedad y permanencia, elementos todos que a



nuestro juicio concurren. Pues la demandada se ha encargado de probar que la empresa para el año 2018 presenta un importante déficit financiero, que no logra superar en el año 2019, y que luego se extiende para el año 2020 por circunstancias que le son ajenas a su propia administración, obteniendo una mejoría para este último año, pero que aun así concluye con números negativos, requiriendo dos préstamos cuantiosos para superar su situación y en donde el despido de la trabajadora, quien detentaba el cargo de ejecutiva de ventas, se enmarca en otros despidos de trabajadores que realizaban idénticas labores, siendo su cargo reabsorbido por aquel ejecutivo de la zona sur más extrema, sin verificar una nueva contratación.

De esta manera por ajustarse a derecho la causal este tribunal no hará lugar a aquella y consecuencialmente a la devolución del descuento por aporte al seguro de cesantía.

**15°:** Sin perjuicio de lo anterior, dado el reconocimiento de relación laboral a contar del día 1° de julio del 2012, corresponde que la demandada de pago a los tres años adicionales de servicios antes reconocidos y que no fueron pagados en el correspondiente finiquito.

**16°:** No se condena en costas a la parte demandada por no haber resultado completamente vencida.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 420, 425, 432, 453, 454, 456, 459 del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, y demás normas legales vigentes, SE DECLARA:

- I. Que entre la demandante MARCELA LORETO LOPEZ CUEVAS, y la demandada AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA., existió una relación laboral cuya fecha de inicio corresponde al día 1° de julio de 2012 y su término al día 26 de octubre del año 2020.
- II. Que la demandada deberá pagar la suma de \$5.397.237.- por 3 años de diferencia años de servicios.
- III. Que la demandada deberá regularizar el pago de las cotizaciones de Seguridad Social en las instituciones de AFP Cuprum, Isapre Banmédica y AFC Chile por el periodo comprendido entre el 1° de julio del 2012 al 31 de marzo del 2015, teniendo como base remuneratoria la que resulte de la



sumatoria de las boletas de honorarios para cada mes (cuando sean más de una) descritas en el considerando quinto de la presente sentencia, sin perjuicio del tope legal.

- IV. Que el despido decidido por la demandada, no ha puesto término a la obligación remuneratoria de aquélla debiendo continuar con el pago de la suma de \$1.799.079 desde el término de la relación laboral hasta la efectiva convalidación.
- V. Que el despido verificado por la demandada se ha ajustado derecho, por lo que se rechaza la demanda a este respecto.
- VI. Que, la suma referida, debe a ser pagada con los respectivos reajustes e intereses.
- VII. Que cada parte pague sus costas.

Regístrese, notifíquese, ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia y archívese en su oportunidad.

**RIT O- 6830-2020**

**Dictada por LILIANA LEDEZMA MIRANDA, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**

?



A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>